

Los desafíos de la victoria (sobre un derrotado... no vencido)

Marcelo Contreras



En la guerra existen batallas decisivas: aquellas que definen la suerte de una contienda. Si efectivamente el plebiscito fue una batalla, tal cual lo afirman hoy los sectores oficialistas, correspondería a esa categoría: la de una batalla decisiva. Con la derrota del 5 de octubre han quedado sepultadas las pretensiones del general Pinochet de permanecer en el poder hasta 1989. A la vez, se ha generado una muy seria dificultad -sino la imposibilidad- para proyectar la institucionalidad política contenida en la Constitución de 1980 y el esquema económico -al menos en la forma que se ha aplicado el modelo actual- más allá del plazo que establece la propia Constitución como prórroga del gobierno de Pinochet, hasta el mes de marzo de 1989.

En este sentido, la oposición ha conseguido en el plebiscito una victoria estratégica, capaz de cambiar la secuencia de acontecimientos que tenían prevista los sectores continuistas, aun en la eventualidad de la derrota. El triunfo opositor abre un proceso de transición real a la democracia, en donde aún falta determinar el curso, los ritmos y las modalidades, que estarán marcados por presiones y reacciones, aperturas y cerrazones. Y, muy probablemente, por formas de negociaciones indirectas, pero con datos precisos: no hay ninguna condición para que el general Pinochet intente una nueva postulación en las elecciones generales que se avecinan el próximo año; el período de transición tiene un plazo fijo: deberá culminar a más tardar en marzo de 1990. Eso hace que hoy la oposición se convierta en un actor principal de este proceso de transición.

Quizás el gran error político cometido por el general Pinochet en estos quince años sea el haber optado por esta vía de confrontación electoral para conseguir la continuidad de su régimen. Pinochet demostró gran destreza y habilidad para manejar las coordenadas del poder autoritario, pero una gran incapacidad de conducirse en el área estrictamente política y, particularmente, en el terreno electoral. La propia conducción de su campaña así lo demuestra. Fue una campaña dirigida por militares, "técnicos" y funcionarios, despreciando la capacidad y experiencia de los auténticos dirigentes políticos de derecha, quienes tuvieron que resignarse a jugar un rol subordinado. Una campaña sin ideas o proyectos de futuro, apostando a que la mayoría votaría sí por "agradecimiento" a la obra del régimen militar, y que sólo se requería apelar a los fundamentos que motivaron el golpe de Estado de 1973 para que automáticamente se reprodujera la correlación de

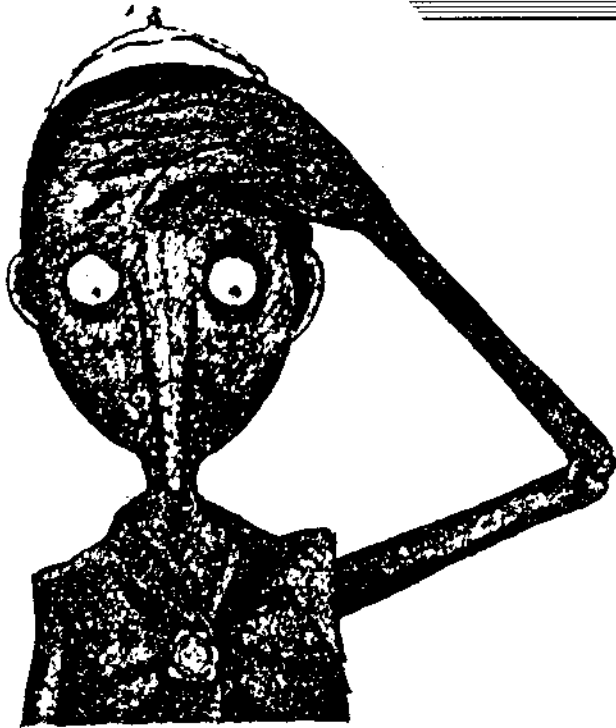
fuerzas que hizo posible la intervención militar.

Obviamente existió un grueso error de apreciación de la coyuntura política: tan grave resultó sobredimensionar la fuerza propia, como subvalorar la capacidad de la oposición de enfrentar el desafío continuista en este terreno político electoral. Todos los supuestos en que se afirmaba la estrategia continuista se vinieron abajo en el curso de la campaña. La oposición aceptó el reto planteado por el régimen en el plebiscito y se jugó para derrotarlo en su propio terreno. La inscripción electoral de cerca de siete y medio millones de inscritos superó con largueza no sólo los cálculos del gobierno, sino los pronósticos más optimistas de la propia oposición. Paradójicamente, fueron sectores socialistas los primeros en afirmar que Pinochet no podía ganar en un plebiscito limpio y transparente y llamaron a los chilenos a inscribirse en los registros electorales. Los vilipendiados dirigen-

tes políticos cobraron la cuenta del desprestigio que el gobierno lanzó sobre ellos en estos quince años. Superando sus diferencias, se concertaron sólidamente tras el objetivo común de derrotar a Pinochet. Inscribieron legalmente partidos que fiscalizaron el plebiscito, recorrieron el país, se movilizaron; y transmitieron un mensaje común de moderación, alegría y futuro, dando un sentido más profundo a la confrontación electoral. No solamente un sí o un no al candidato de los comandantes en jefe de las FFAA, sino el sentido de una verdadera confrontación entre autoritarismo continuista y democracia.

Combinación de elementos

Hoy, los grandes derrotados son Pinochet y el equipo político que lo llevó al fracaso electoral. A la vez, el sector de las FFAA, más propiamente del Ejército, que, por sobre sus deberes institucionales, se involucró activa-



mente en la campaña. Más allá de las personas y grupos, en el plebiscito naufragó el esfuerzo de proyectar el régimen militar. El triunfo opositor genera un proceso de transición a la democracia con la misma efectividad que la derrota de las Malvinas lo inició en Argentina, o la derrota de los militares en el plebiscito constitucional lo generó en Uruguay.

Tan importante como el triunfo opositor es su reconocimiento por parte del régimen militar. Son varias las causas que explican esta actitud por parte de las FFAA y el propio Pinochet. La principal tiene que ver con el difícil consenso construido al interior de las instituciones armadas para enfrentar el plebiscito, y que se funda en el respeto a la Constitución que juraron respetar en 1980. Para un importante sector, el mecanismo plebiscitario no era una mera fórmula de continuidad, sino una consulta real del país. En segundo lugar, la convicción del propio Pinochet acerca de su victoria, y su interés en legitimar el resultado de la consulta plebiscitaria ante el país y la opinión pública internacional, que llevaron al gobierno a dar satisfacción a prácticamente todas las demandas opositoras para participar en este evento electoral, no con la oportunidad y extensión que se hubiera deseado, pero finalmente con las po-

sibilidades de hacer una campaña efectiva. Recorriendo el país, manifestándose, organizando el control y, quizás el factor desequilibrante, accediendo a la televisión, en programas de debate político y manteniendo una franja publicitaria de quince minutos en los últimos 27 días de campaña.

El reconocimiento de la victoria opositora es la consecuencia natural de ambos elementos combinados. Con una enorme desigualdad de medios, en condiciones muy adversas, debiendo vencer el temor, la apatía y el escepticismo, la oposición logró conseguir reglas del juego claras, que obligaron también al gobierno. El otro factor que ayudó al reconocimiento es que el plebiscito logró capturar la atención de la opinión pública mundial, que masivamente vino a observar su desarrollo de la opinión pública mundial, que masivamente vino a observar su desarrollo no dejando espacio a maniobras de última hora -como las que se intentaron- haciendo obligatorio el reconocimiento del resultado.

Ahora, el general reordenamiento

Es verdad que la transición no es muy evidente y visible para la mayoría del país. Pinochet sigue en el poder y

continúa actuando como si la derrota hubiese sido un accidente, negándose a adoptar una actitud más pragmática, realista y aperturista, acorde con la magnitud de su derrota. La situación nacional no parece haber cambiado demasiado. En el último tiempo se han activado procesos en contra de periodistas opositores y muchos partidarios del *no* han sufrido represalias por sus opciones políticas.

Sin embargo, hay procesos políticos y sociales más profundos que muestran que la transición efectivamente se ha iniciado, pese a que ni el gobierno ni la oposición contaban con diseños claros para la eventualidad del triunfo del *no*. El primer cambio sustantivo tiene que ver con los supuestos políticos sobre los cuales es posible hoy proyectar el futuro del país. El 55 por ciento de los votos convierte a la oposición en una mayoría sustantiva, que muy probablemente la llevará al gobierno en la próxima elección presidencial. Esto la transforma en un actor principal del proceso de transición, y en un factor de poder del que no se puede prescindir en este período de transición.

Todo ello origina un proceso muy profundo de reordenamiento político, económico y social, que ya se ha iniciado. Quizás por su naturaleza, han sido las FFAA quienes han tomado la iniciativa en este terreno. El primer signo, tal como lo muestra el último cambio de gabinete, es su paulatino abandono de las funciones de gobierno, para concentrarse en sus funciones institucionales. El segundo paso estará marcado por el resultado de las juntas calificadoras, que adquieren una particular relevancia, pues marcarán el ánimo con que las instituciones de la defensa enfrentarán este proceso de transición. Lo previsible, sin embargo, es que sus resultados acentúen la preocupación de fortalecimiento institucional y que el costo de la derrota lo asuman aquellos altos mandos que mayor compromiso político adquirieron en la campaña. En este sentido, es en el Ejército en donde se presume que habrá cambios más profundos.

La reconstitución de derecha

El proceso de reordenamiento también se ha iniciado en el terreno po-

lítico. En las filas oficialistas no parece haber terminado el tiempo de las recriminaciones, las culpas mutuas y la determinación de las responsabilidades. Sin embargo, es claro que se ha iniciado, a la vez, un proceso de decantaciones que tiene como horizonte la lucha por la hegemonía en el proceso de reconstitución de la derecha chilena. Un punto importante es el lugar en que este esfuerzo de recomposición política tiene lugar. Si es al alero del gobierno militar, en donde el general Pinochet tiene un rol protagónico, o si es fuera del gobierno, en forma autónoma, en donde el régimen militar sólo tiene la responsabilidad de facilitar este proceso. Dos parecen ser los actores principales en este esfuerzo de recomponer una opción política de una derecha capaz de competir en democracia. Por un lado, el partido Renovación Nacional, que fue el apoyo más crítico y distante del general Pinochet durante la campaña, y que hoy pone los énfasis más fuertes en la independencia y distancia del gobierno en el empeño por la reconstitución de una alternativa de derecha. Del otro lado, la Unión Demócrata Independiente (UDI), que carga con la mayor responsabilidad en la derrota, y que aún espera heredar civilmente al régimen militar, apostando al 43 por ciento de los votos obtenidos por la opción *sí* en el plebiscito, confiando que esa votación sea traspasable a una alternativa única del oficialismo.

Hasta ahora, quién parece tener las mayores posibilidades de constituirse en el eje de este esfuerzo de reconstitución de una nueva derecha es el partido Renovación Nacional, que actuó como conciencia crítica, mientras la UDI hacía gala de un ilusorio triunfalismo. En todo caso, serán los empresarios -una vez más la derecha económica- quienes determinarán el protagonismo político de una u otra alternativa. O quizás de ninguna de las dos. En nombre del realismo.

El nombre y el fondo

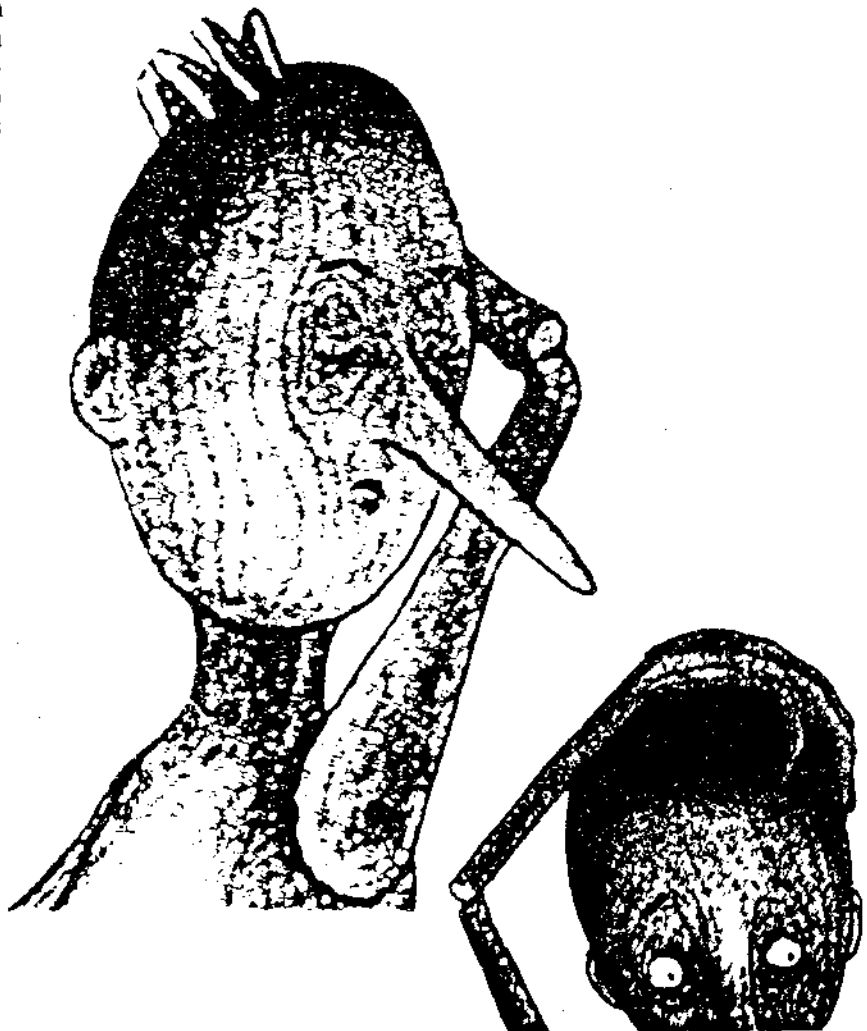
La oposición, por su parte, sufre un idéntico proceso de reordenamiento. Finalizado el plebiscito, las miradas del país y de la opinión pública internacional se vuelcan hacia los grupos

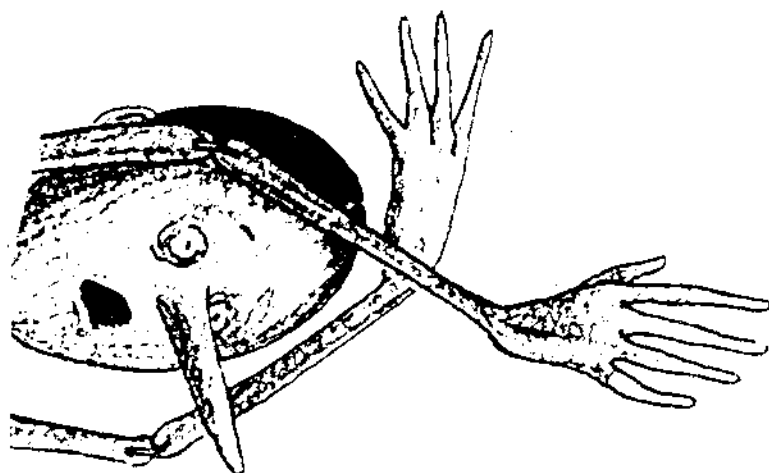
opositores, buscando conocer el diseño de transición que impulsarán, así como la coalición que aspira a dar gobierno al país, tras estos traumáticos quince años de autoritarismo. Y así como es posible advertir que el gobierno carecía de un diseño político para la eventualidad de la derrota, así, la oposición tampoco tenía un diseño de victoria. Sobre todo de una victoria que fuera reconocida sin mayores dificultades por las FFAA y el propio general Pinochet.

De allí sus dificultades para asumirse como una mayoría real, y su incapacidad, hasta ahora, de tomar una iniciativa política que acelere el proceso de transición. A la primera reacción de euforia ha sucedido un proceso de ajustes que aún tomará un tiempo en decantarse. El acuerdo del comando de 16 partidos que lograron la victoria en el plebiscito, de transformarse en un comando de partidos políticos por la democracia, comprometiéndose a ofrecer un candidato único en la próxima elección presidencial, está fuertemente presionado por la evidencia de que la unidad alcanzada

durante la pasada campaña plebiscitaria fue una de las claves del éxito. Ello no implica necesariamente una estrategia concertada, o acuerdos políticos y programáticos más de fondo. Recién los partidos del Comando por el No empiezan a explorar esta perspectiva en múltiples reuniones, juntas, plenos y debates, que hoy concentran los afanes de la oposición.

La democracia cristiana (DC) abrió los fuegos en este sentido, en la pasada junta nacional realizada en el mes de octubre, en donde su presidente Patricio Aylwin rindió su cuenta política y convocó al proceso de renovación de directivas. Inevitablemente se cruzó allí el tema del candidato y el gobierno futuro. Su resolución no será fácil en la DC. No sólo porque a su interior existen varios candidatos, sino porque la definición de un nombre está necesariamente ligado a temas más de fondo, como la delineación de una política de alianzas, de la que históricamente careció la DC; el problema de la coalición y el programa que se ofrecerá al país para la próxima etapa, así como el de su





propia inserción y definición en el panorama político nacional.

Definiciones más precisas

De magnitudes similares son las definiciones que enfrenta el conglomerado de Izquierda Unida (IU), que puso a prueba su coherencia durante la pasada campaña plebiscitaria, a través de las políticas contradictorias que impulsaron sus principales vertientes: los socialistas liderados por Clodomiro Almeyda, y el Partido Comunista. Si bien el PC fue capaz de realizar un giro en su política de rebelión popular, y llamar en la última fase de la campaña a su militancia a inscribirse y participar en el plebiscito, no cabe duda de que hoy debe realizar una evaluación crítica de su política, para adecuarla a los nuevos desafíos que se proyectan tras la victoria opositora que los lleve a converger con sus aliados históricos. Este proceso no será

fácil y supondrá costos políticos en las filas comunistas. Actualmente se encuentra en proceso un congreso de dicho partido, que tendrá la tarea de hacer estos ajustes políticos, y que seguramente implicarán una renovación de su dirección.

Un tema no menor en dicho evento lo constituirá la política militar, y más concretamente la ambigua relación mantenida hasta ahora con el escindido Frente Manuel Rodríguez (FMR), que más de un dolor de cabeza ha costado a los comunistas. Finalmente, un sector del Frente se autonomizó completamente de la influencia PC -precisamente el sector que ha dado por finalizada la tregua que decretaron con motivo del plebiscito- y hoy ha lanzado una nueva ofensiva militar, en la forma de asaltos a cuarteles policiales, en la perspectiva de imponer su estrategia de guerra popular, que apunta a impedir una transición pactada. Es verdad que la sig-

nificación de este grupo no es importante, pero tiene la capacidad de tensionar el escenario de transición, obligando a los comunistas a definiciones más tajantes y precisas en relación al tema de la violencia.

Pese a los esfuerzos

Finalmente, los socialistas viven su propio proceso de reordenamiento. Escindidos en diversas vertientes y participando en referentes comunes, los socialistas han acumulado una significativa influencia política al calor de la campaña plebiscitaria, que los convierte en aliados indispensables del proceso de transición y de la futura democracia. El sector socialista liderado por Ricardo Núñez logró convocar a la constitución de un partido instrumental -el Partido por la Democracia (PPD)- que fácilmente superó la barrera de 35.000 afiliados que requería su inscripción legal, mostrando un gran dinamismo, capacidad de movilización y control durante el plebiscito. A su haber, también debe anotarse la consolidación del liderazgo nacional del dirigente socialista y presidente del PPD, Ricardo Lagos.

Por su parte, el sector almeydista mostró su capacidad de autonomía y flexibilidad al concurrir a la concertación de 16 partidos reunidos en el comando de campaña, aprovechando de fortalecer su propia estructura nacional y su influencia política a través del Comando Socialista por el No (COSONO), que aisló la política abstencionista de los comunistas en relación al plebiscito. La reciente liberación de Clodomiro Almeyda fortalece la influencia de dicho partido.

Sin embargo, parece difícil que los socialistas jueguen unidos esta influencia en el próximo período. Pese a los esfuerzos por hacer converger

CONCRETO

"-¿Cuál es su pronóstico del resultado del plebiscito?

[...] el no debería ganar por un veinte por ciento; sin embargo, acepto que pueden haber cuatro o cinco puntos menos, por la retención de carnets, porque aparentemente algunas personas tienen doble inscripción (que no se pueden detectar) y por otras situaciones de ese tipo. Aceptemos entonces que ganamos por 15 puntos.

- En concreto, ¿qué significa eso?

57 a 43 por ciento..."

Ricardo Lagos, entrevista en *Apsi* núm. 272, 3 al 9 de octubre de 1988, Santiago de Chile.

ambas orgánicas en un único sentido, lo más probable es que los almeydistas refuercen el frente de IU, inscribiendo un partido instrumental de dicho conglomerado, o un partido instrumental del COSONO, mientras que los socialistas de Ricardo Núñez mantengan vigente su opción de fortalecer el PPD, a través de un proceso de nuevas afiliaciones.

Situación no decantada

Así se ordena el panorama político opositor, con vistas al nuevo escenario político que se abre tras la victoria opositora. En los próximos meses la oposición deberá dar respuesta a los temas más urgentes que demanda una transición política. En primer lugar, el marco institucional de la transición. La Constitución del 80 parece más como una camisa de fuerza que una vía para transitar a la democracia. ¿Cuáles son las reformas que impulsará la oposición para viabilizar un auténtico proceso de transición? Hasta ahora se ha limitado a criticar el itinerario y los mecanismos previstos para tal eventualidad en la Constitución de Pinochet, sin levantar una propuesta alternativa para debatir con las FFAA o con sus interlocutores más probables, los grupos de derecha que buscan distancia de Pinochet.

En segundo lugar, la oposición no ha logrado fijar una plataforma política para estos meses que restan para las próximas elecciones generales de presidente de la República y Congreso Nacional.

En el régimen, en cambio, se trabaja muy activamente en un plan político para enfrentar esta difícil coyuntura. La composición del nuevo gabinete, con el ex ministro de Hacienda Carlos Cáceres como ministro del Interior, da la pauta de los énfasis que pondrá el gobierno en los próximos catorce meses: el intento de dejar todo atado, por lo menos en el área económica. Por ello se ha vuelto a poner de moda el tema de las modernizaciones y las privatizaciones, que el régimen pretende acelerar en estos catorce meses. La primera prioridad es por tanto económica. La segunda es política. En el gobierno, y muy principalmente en la derecha, existe claridad sobre que la actual Constitución,

y más genéricamente la actual institucionalidad, fue hecha a la medida y por encargo del general Pinochet. Por ello hay también consenso en que se requieren importantes modificaciones institucionales, sobre todo por la posibilidad de que la oposición llegue al poder en la próxima elección presidencial. Sin embargo, en el diseño que hoy se discute en La Moneda, se desea postergar para los últimos meses del actual gobierno las modificaciones políticas institucionales. Ello por tres razones. La primera es que se desea aprovechar al máximo la actual institucionalidad para acelerar el proceso de "modernizaciones". En segundo lugar, porque recién se están estudiando el tipo de modificaciones que desde el punto de vista del régimen y de la derecha se requerirían para dejar resguardados sus intereses económicos y políticos de largo plazo en una futura democracia. Por último, por que no se desea aparecer concediendo a la oposición un espacio para debatir hoy día dichas reformas, hasta que la situación no esté decantada.

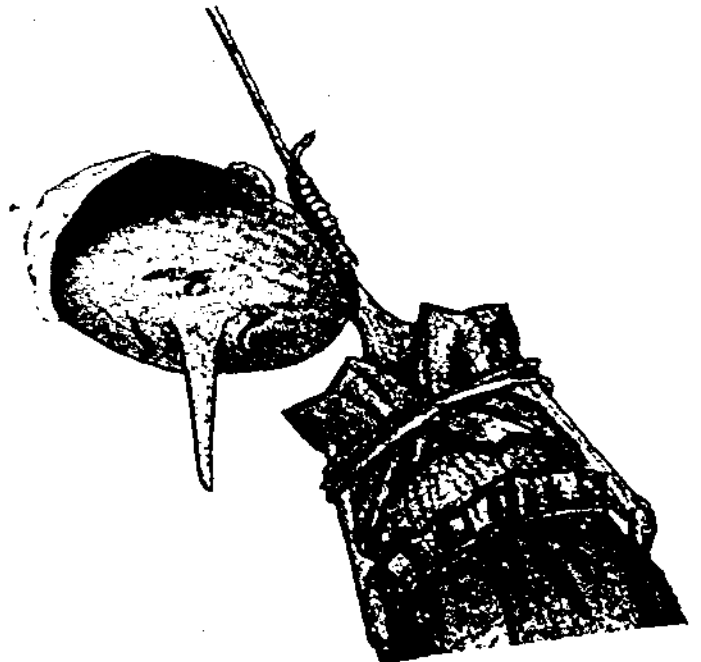
Movillar la mayoría

Frente a este diseño oficialista para los próximos meses, la oposición está atrasada, asumiendo sólo una posición reactiva frente a la iniciativa gubernamental. Hasta ahora no ha desplegado iniciativas políticas sustantivas, no tiene propuestas de reformas políticas,

o de itinerario institucional; tampoco se conocen demandas específicas o plataformas movilizadoras. Por lo menos públicamente, la oposición no ha tomado ninguna iniciativa para establecer conversaciones con el actual gobierno, las FFAA o los grupos políticos de derecha, siendo la iniciativa del obispo Piñera la única instancia que ha logrado reunir en una misma mesa a representantes de la UDI, Renovación Nacional y DC para los efectos de aportar puntos de vista para una pastoral de la Iglesia.

El período de gracia que produjo el triunfo opositor se está terminando. El país requiere de signos nítidos de que se avanza en este proceso de transición, y la oposición no puede agotarse en las preocupaciones únicamente electorales que, siendo muy importantes, corren el riesgo de ensimismarla en el tema de las candidaturas, haciéndole perder el necesario rol protagónico que su condición de triunfadores en el plebiscito les demanda.

Hoy existe espacio y disposición en importantes sectores de derecha para establecer un espacio público de debate y búsqueda de acuerdos para un plan de reformas institucionales. Junto a ello, se requiere una plataforma política, económica y social tras la cual movilizar a la mayoría del país en temas sensibles para la opinión pública en estos catorce meses y aquellas definiciones que marcarán el futuro democrático.



Un juego compuesto

Angel Flisfish

Unido a lo anterior es que cobra sentido la preocupación electoral, en donde es central no sólo la nominación de un candidato a presidente de la República y de parlamentarios, sino la determinación de un programa de gobierno para el primer período institucional que, según el acuerdo opositor, debiera durar cuatro años. También en este sentido se requiere de una propuesta opositora sobre la ley, actualmente en estudio en la Junta de Gobierno, para la elección del Congreso Nacional. El proyecto de elecciones del ex ministro Fernández propone un sistema mayoritario, que podría convenir a algunos partidos opositores, pero termina con la representación proporcional. Lo más probable es que la propuesta de Fernández sea modificada en la Junta por un sistema que reponga un criterio de proporcionalidad. Por ello es tan urgente que la oposición defina una opinión a este respecto.

Meses de dura prueba

Tal como se ha intentado demostrar, el triunfo opositor en el pasado plebiscito cambió el escenario nacional. De manera dificultosa y no exenta de tensiones, el país empieza lentamente a transitar de un sistema autoritario a una democracia. Aunque Pinochet está derrotado, no ha renunciado a jugar un rol protagónico en este período. Así debe entenderse su afirmación de que no está vencido. Tiene aún la fuerza y la capacidad de influir en el próximo período. Tiene además la voluntad de hacerlo. También la derecha aspira a jugar un rol protagónico, no sólo durante estos catorce meses, sino en la disputa electoral. Estos meses pondrán a dura prueba la capacidad opositora de preservar la concertación que possibilitó el triunfo y desarrollar una ini-

Hay la idea, bastante difundida, que los procesos políticos se ajustan, o deberían ajustarse, a un desarrollo muy teatral -épico, operático, o lo que se prefiera- compuesto de actos nítidos, que se consumen en un período de tiempo corto y bien determinado.

Así sucede con nociones como la de la negociación con las Fuerzas Armadas. Sin duda, el evento electoral del 5 de octubre ha establecido condiciones para una redefinición de la relación entre FFAA, por una parte, y las sociedades política y civil chilenas. Aún más, para obtener una futura consolidación democrática, esa redefinición es necesaria.

Pero hay quienes imaginan que esa redefinición implicará un evento relativamente espectacular, consistente en una suerte de reunión efectiva de negociación, en un recinto determinado, en torno a una mesa y en un ambiente solemne, y que ese evento tendrá como desenlace un pacto, contrato social o acuerdo entre los actores.

Lo grave de esta imaginación es que crea expectativas de que las cosas ocurrirán así y, si semejante evento no tiene lugar, hay entonces frustración y condiciones para declarar el fracaso de una política, lo cual por supuesto tornaría más difícil una solución a la cuestión de la relación entre FFAA y sociedad.

Lo más probable es que las cosas no ocurran de esa manera, pero ello no implica que no haya negociación.

La negociación puede ser implícita, y así con certeza será, o lo está siendo. La mejor manera de conceptualizar el proceso es verlo como un juego compuesto por una sucesión de movidas parciales, que procuran dar señales al otro o a los otros, que culminan en concesiones parciales, que van redefiniendo las relaciones. Y obviamente, en este juego no están ausentes las amenazas, el recurso al poder y otras facetas ingratas de la existencia.

Además, este juego probablemente durará un tiempo largo. Continuará hasta diciembre de 1988 y se prolongará más allá. La redefinición de la relación entre FFAA y sociedad, por ser un problema principal del desarrollo político chileno, no se va a resolver de la noche a la mañana.

Quizás sea una lástima que la vida política no se ajuste a ficciones literarias, teatrales o historiográficas, pero más que lamentarlo lo único sensato es aceptarlo. (X)

ciativa política que garantice una efectiva transición hacia la democracia, evitando que los protagonismos personales o el ideologismo excesivo, conspiran contra el rol protagónico

que se espera de la concertación, que fue capaz de vencer a un poderoso gobierno autoritario a través de una confrontación electoral como la que tuvo lugar el pasado 5 de octubre. (X)

PREOCUPANTES PLANES

"Washington, UPI. El gobierno de EEUU manifestó ayer al embajador chileno Hernán Felipe Errázuriz su 'seria preocupación' [...] El secretario asistente de Estado, Joan Whitehead, comunicó esa preocupación de la Casa Blanca al embajador Errázuriz, en tanto que el embajador estadounidense en Santiago, Harry Barnes, hizo llegar el mismo mensaje al ministerio de RREE de Chile, según indicó la vocera del Departamento de Estado, Phyllis Oakley: 'hemos escuchado informes de que el gobierno de Chile tiene planes para cancelar el plebiscito presidencial a celebrarse el miércoles 5, o para anular sus resultados...'"

Fortín Mapocho, 4 de octubre de 1988, Santiago de Chile.